

De rústicas revueltas: añoranza y utopía en el México rural	Título
Bartra, Armando - Autor/a;	Autor(es)
Proceso agrario en Bolivia y América Latina	En:
La Paz	Lugar
CIDES-UMSA, Posgrado en Ciencias del Desarrollo PLURAL editores	Editorial/Editor
2003	Fecha
	Colección
Luchas campesinas; Reforma agraria; México;	Temas
Capítulo de Libro	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Bolivia/cides-umsa/20120904012204/11reforma.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences



De rústicas revueltas: Añoranza y utopía en el México rural

*Armando Bartra**

Preámbulo:

El siglo de las revoluciones campesinas

El camino de México a la modernidad está empedrado de guerras campesinas. A lo largo de los siglos XIX y XX, el progresivo despliegue de la economía capitalista y del orden burgués, culminó en la sumisión de la agricultura a la industria y del mundo rural al urbano. Paradójicamente, los combates que derivaron en la dictadura de las ciudades se libraron casi siempre en el campo.

Este peculiar curso histórico no es sólo mexicano. La feroz colonización comercial y financiera del planeta desplegada durante el siglo XIX, anunciaba para el XX un mundo a imagen y semejanza de la Europa industrial. Un orbe de factorías y ciudades, habitado por unos cuantos burgueses y legiones de proletarios. Para unos esa la inminente modernidad global como saldo del progreso; para otros la antesala de la revolución socialista. Pero para unos y otros el emparejamiento productivo, social y cultural del planeta aparecía como una etapa insoslayable y necesaria en la historia de la humanidad.

Este mundo tecnológica, económica y socialmente homogéneo; esta universalización del sombrero de copa y el overol;

* Director del Instituto de Desarrollo Rural MAYA, México D. F.

esta humanidad sin terratenientes y sin campesinos, sin etnicidades ni nacionalismos; este orden sin horizontes precapitalistas ni remanentes preburgueses; esta utopía compartida por los apologistas y los críticos del capital, nunca llegó, se quedó en las previsiones de los agoreros de la historia. El XX no fue el siglo del esplendor empresarial planetario y la revolución socialista generalizada. Al contrario, durante la pasada centuria fracasó la promesa civilizadora que el capital había hecho a los países periféricos y se multiplicaron las revoluciones desde el “atraso” buscando atajos menos dolorosos a la modernidad.

Y si de rebeldías se trata, el XX no fue el siglo del proletariado sino de los campesinos; no el de la expropiación de las fábricas sino el de la recuperación de las tierras.

La revolución rusa de fines del XIX y principios del XX es ante todo la guerra del *mujik*, y su curso dramatiza los dilemas de la inteligencia revolucionaria eslava frente al “atraso” de su nación. La gran pregunta de los pensadores de raíz romántica llamados “populistas”, que rechazaban intelectualmente la inevitabilidad de una etapa capitalista en el tránsito del viejo régimen al reino de la justicia, ameritó una respuesta antimarxista del propio Carlos Marx: la reivindicación de la comunidad agraria como semilla del nuevo comunitarismo y de la revolución en sociedades periféricas e “inmaduras” como transitable atajo al socialismo. Pero Marx podía decir misa, pues los marxistas ortodoxos, como Plejanov, creían firmemente en el curso unilineal de la historia y apostaban a la alianza del proletariado con la burguesía “progresista” y no con los campesinos “reaccionarios”. Hasta Lenin, que en comparación con los fundamentalistas de la época era un heterodoxo, sobreestimó la descomposición de la comunidad agraria y la proletarianización del trabajo rural. De modo que cuando los jornaleros agrícolas exigieron tierra y el movimiento rústico se unificó en torno a demandas campesinas, no fueron los bolcheviques de Lenin sino los social-revolucionarios de tradición populista quienes los dotaron de programa. Pero si en

el derrocamiento del zarismo los campesinos pusieron el número y la fuerza, la conducción quedó en la minoría comunista, y pronto el nuevo gobierno le dio la espalda a sus aliados del campo, primero reprimiendo a las huestes “contrarrevolucionarias” de Nestor Majhno y más tarde emprendiendo la “liquidación económica” de la presunta burguesía agrícola reaccionaria encarnada en los *kulaks*.

Prolongación oriental del comunismo ruso, la revolución China es el más extenso e intenso ejercicio contestatario campesino del siglo XX. En un país netamente agrario y con un orden político-social arraigado en el despotismo asiático, cientos de millones de trabajadores rurales combatieron a la vez contra la intervención neocolonial japonesa y por liberarse de sus propios demonios. Y lo hicieron bajo la conducción política de un partido comunista que tuvo que reinventar el marxismo para responder a retos inéditos. Los “privilegios del atraso”, que según los populistas eslavos permitirían a Rusia transitar del subdesarrollo a la nueva sociedad sin pasar por el capitalismo, son traducidos por Mao Tsedong como la “página en blanco”, metáfora de una sociedad que, precisamente por sus anacronismos, podía encontrar atajos a la modernidad. Los avatares de la insurrección China son puntual alegoría del curso de las revoluciones del siglo XX. Fracasada la insurrección obrera de Shangai, la lucha se traslada al campo, de donde finalmente marchará de nuevo a las ciudades. Todo a través de una “guerra popular prolongada”, modalidad rural y campesina de la revolución, que sustituye a las frustradas insurrecciones generales de los obreros urbanos.

Si a esto sumamos los masivos movimientos agrarios y las intensas luchas independentistas que conmueven a la India, la otra gran nación rural del planeta, tendremos casi completo el panorama revolucionario de la primera mitad del siglo XX. Un escenario presidido por la sublevación de más de mil millones de campesinos y donde la insurgencia proletaria es subtrama menor. Todo porque las revoluciones propiamente dichas de la pasada centuria fueron conmociones del presunto

“atraso” y no inminencias liberadoras desde la supuesta “modernidad”. Rupturas históricas mal pronosticadas que sucedieron mayormente en Asia y no en Europa, en las orillas en vez del centro.

Del campo a la ciudad, de la periferia al centro, de los márgenes subdesarrollados y agrarios del sistema a las orgullosas urbes industriales, los campesinos enterraron al viejo régimen que la lógica del capital realmente existente lejos de erradicar remachaba. Envilecidos pero perpetuados por el nuevo mercantilismo agrario, un orden expoliador que saqueaba sistemáticamente su trabajo sin expropiarlos nunca del todo, y a falta de revoluciones proletarias que los llevaran de la mano a la libertad, los campesinos tuvieron que emanciparse por sí mismos.

Insurgencias agrarias decimonónicas

Nuestra revolución campesina de 1910 es parte significativa de este proceso y su momento estelar en el continente americano. Pero en México la historia de las rebeldías rústicas empezó mucho antes.

Derrotados o pírricamente victoriosos los campesinos han sido actores destacados en nuestra historia como país independiente. En el intrincado tránsito a la modernidad representaron sucesivamente el papel de víctimas, villanos y héroes efímeros, pero siempre fueron personajes protagónicos. Y si bien en el curso del drama nunca han abandonado la escena, lo cierto es que mudaron profundamente. Pero en un punto los campesinos han sido constantes y hasta intransigentes: su oposición a las modalidades burguesas del “progreso”. En su sinuoso proceso de consolidación, el capitalismo mexicano se ha topado siempre con la resistencia, la oposición o la franca rebeldía de las comunidades rurales. Si “progreso” es patrimonio del régimen burgués y “modernidad” sinónimo de capitalismo, los campesinos mexicanos han sido y son empecinadamente “reaccionarios”.

Pero esta visión negativa respecto de los labradores, corresponde a la interpretación unilineal de la historia como un curso determinista al que todos debemos plegarnos so pena de resultar reaccionarios. La verdad es que el orden burgués enseña el cobre desde pequeño y las clases subalternas casi nunca han postergado sus propias demandas para sumarse alborozadas a los planes del gran dinero. En la lucha contra el antiguo régimen, los sueños libertarios de las incipientes clases trabajadoras urbanas y sobre todo de los campesinos, son contemporáneos del proyecto burgués. Por que las utopías no esperan al atardecer como el ave de Minerva, son pájaros matutinos que cantan al alba de los tiempos. Así, junto con el capital nace la lucha anticapitalista, y los enemigos madrugadores del mercantilismo absoluto no tienen que hipotecar sus intereses y aplaudir a los nuevos amos con tal de evitarse el mote de conservadores.

Rejeros siempre han sido, pero en su terca oposición al inhóspito curso de la historia los rurales rasos embarnecieron y mudaron de rostro. Premisa del alumbramiento del capitalismo, condición permanente de su reproducción y componente destacado de su cuestionamiento, el campesinado es una clase en vilo, una multitud en perenne rebeldía.

Todo tiempo pasado debió ser mejor

Las primeras etapas del curso campesino, asociadas a la emergencia y consolidación en México del mercantilismo absoluto, transcurren durante el siglo XIX; una centuria marcada por sucesivas insurrecciones rurales que se desarrollan casi sin interrupción y cubren prácticamente todo el país.

El panorama es abigarrado y múltiples los agravios causantes del estallido, aunque predominan los reclamos por despojos de tierras y por tributos excesivos. Levantamientos mesiánicos como la "guerra de castas" en la península de Yucatán y la rebelión Chamula en Chiapas, coexisten con movimientos inspirados en un nebuloso socialismo, como el de la

Sierra Gorda; el antiimperialismo de los rebeldes de Tantoyuca contrasta con la afiliación del “Tigre de Álica” y sus seguidores a la intentona imperial de Maximiliano. Detrás de los movimientos están los liberales o los conservadores, el clero o algunas potencias extranjeras; y las luchas acarrearán agua al molino del centralismo o del federalismo, de la reforma o de la contrarreforma, de la independencia o del imperio. A primera vista los campesinos son volubles por naturaleza. Materia dispuesta para todas las causas, se movilizan por conflictos disímboles y persiguen objetivos diversos. No son más que tropa, dirían algunos, simple materia prima en guerras ajenas.

Pero más allá de lo anecdótico, en el fondo, las persistentes insurrecciones rurales que mantienen al país en vilo durante todo el siglo XIX, son siempre manifestaciones de resistencia a la expansión de un capitalismo que impone sus premisas a sangre y fuego. Síntomas de la oposición rural a un “progreso” que avanza por vías socialmente reaccionarias. Son, en fin, estallidos de rebeldía contra una modernidad que expropia pero no libera, que cancela la precaria autonomía de las comunidades sin ofrecer derechos ciudadanos, que lejos de romper los yugos del antiguo régimen remacha sus grilletes y suma cadenas a las cadenas.

Porque, tanto durante la reforma liberal como en el porfiriato, los forjadores del progreso mexicano impusieron su programa modernizador a contrapelo de las mayorías agrarias y frecuentemente a filo y bala. En su pretensión de liberar de sus viejos vínculos a la tierra y al trabajo, el incipiente capitalismo dirigió sus baterías contra las comunidades rurales, y fue de arranque un proyecto antipopular que los campesinos vieron como otra vuelta de tuerca en el añejo sistema de explotación.

La aplicación de las Leyes de Reforma “liberó” a las comunidades de gran parte de sus tierras pero no exoneró proporcionalmente a los campesinos de las cargas impositivas. Y de la misma manera, con la desamortización de los bienes comunales se pretendió “desvincular” a la mano de obra rural, pero el empleo resultó azaroso, estacional, mal pagado y con frecuen-

cia forzado, compulsivo y matador. Sometidas a un doble saqueo y expropiadas de la base material de sus ingresos, las comunidades estallaron. La chispa no fueron los viejos agravios ni tampoco los nuevos por sí mismos, el disparador de la insurrección fue la explosiva combinación de unos y otros.

Acosadas por las sucesivas oleadas expropiadoras de la Reforma y el porfiriato, las comunidades reaccionaron contra el “progreso” y la “modernidad”. Ante un oscuro presente y un ominoso futuro, no quedaba más que la esperanza milenarista. De modo que conforme avanzaba el siglo XIX, los campesinos fueron llegando a la conclusión de que todo tiempo pasado debía haber sido mejor, y presas de una súbita nostalgia conservadora se rebelaron contra los avances del mal y para restaurar tiempos pretéritos que se les antojaban felices.

Pero un gobierno porfirista que gobernaba para todos los poseedores, hizo el milagro de reconciliar a la clase dominante. De modo que las insurrecciones campesinas perdieron a sus aliados coyunturales y en vez de fisuras en el poder se toparon con una represión unánime y sangrienta. Así, la estabilidad entre los dos siglos fue posible por la derrota de las rebeliones indígenas. La proverbial “paz porfiriana” se fincó sobre los sepulcros de innumerables campesinos masacrados en combate o simplemente asesinados.

En la horma

Tras el fragor de las batallas un nuevo orden rural se iba imponiendo silenciosamente. La utopía *farmer* de los reformadores liberales no se cumplió: los pequeños agricultores independientes y protoempresariales de carácter ranchero y los jornaleros auténticamente libres, resultaron la excepción, mientras que el latifundio y las labores impuestas siguieron dominando el panorama rural. Sin duda, el trabajo agrícola se fue unciendo paulatinamente al capital, pero no por vías proletarias sino por mecanismos de trabajo forzado, más crudos pero más efectivos. Así, el peonaje “acasillado” de las haciendas del centro;

el enganche estacional forzoso en plantaciones, monterías y fincas tropicales del sureste; y el franco régimen esclavista de las plantaciones henequeneras de Yucatán, fueron las formas vicarias del trabajo asalariado. Mientras que los aparceros, arrendadores precarios y “habilitados” constituían un ilusorio campesinado independiente.

Los labradores que se someten al nuevo orden son sobrevivientes de las grandes insurrecciones de vocación restauradora. Pero su condición de derrotados no los hace sumisos. Y la abierta rebeldía del pasado no se cancela, es sustituida por el sordo regateo dentro del orden presente. En algunos casos la injusticia entripada de todos los días incubaba iras personales: Doroteo Arango y Santana Rodríguez, fueron bandidos antes de transformarse en los revolucionarios Pancho Villa y *Santanón*; y un tal Zapata Salazar fue en su momento perseguido por delitos del orden común. Pero los verdaderos héroes de las soterradas luchas de los años “pacíficos” del porfiriato no son los bandidos sociales sino los cientos de anónimos representantes que encabezaban a sus comunidades en interminables y casi siempre infructuosas reclamaciones legales. Zapata, Amador Salazar, Genovevo de la O y otros caudillos militares, brillaron en el Morelos revolucionario de la segunda década del siglo XX, pero antes de ellos los líderes campesinos del estado eran hombres oscuros y pacientes, como Jovito Serrano, quien defendió tesoneramente al pueblo de Yautepec contra la hacienda de Atlihuahán y pagó su atrevimiento con trabajo forzado en las monterías de Quintana Roo.

Con el porfiriato se extiende y consolida un nuevo tipo de relaciones agrarias. No se trata de los nexos que se suponen típicos del régimen burgués, pero sin duda responden a la implacable lógica del gran dinero. De grado o por fuerza, los campesinos aprenden a coexistir con ellas y a negociar su sobrevivencia en este nuevo contexto. Y así, la lucha abierta por utopías conservadoras va dejando su lugar al sordo forcejeo más o menos pacífico. Por otra parte, es sintomático, aunque no generalizado, el que a principios del siglo XX algunos movi-

mientos campesinos radicalizados, como el de los indígenas popolucas de la sierra de Sotepán, en Veracruz, y los seguidores de los hermanos Gutiérrez, en Tabasco, se vinculen a la dirigencia anarco-comunista del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón; agrupación que sin lugar a dudas no mira hacia el pasado sino hacia el porvenir. Más sintomática aún es la incorporación al magonismo de numerosos indios yaquis de Sonora, remanentes de las guerras del XIX, y de algunos sobrevivientes de la rebelión tomochitca, de Coahuila, que sustituyen la inspiración mesiánica de la “santa niña de Cáborá” por la prosaica conducción política de la Junta Organizadora del Partido Liberal.

Pero aunque anuncian una lucha agraria inédita, estos movimientos no hacen verano, y la emergencia de un movimiento rural de nuevo tipo tendrá que esperar hasta la segunda década del siglo, cuando el desgaste económico del “milagro porfirista” y la reaparición de enconos dentro de la clase dominante, propiciarán de nueva cuenta la insurrección campesina.

La revolución agraria mexicana

El historiador John Womack afirmó que los campesinos de Morelos se fueron a la revolución porque no querían cambiar, y lo mismo podría decirse del resto de los trabajadores rurales. Como veremos la tesis es cierta y no lo es.

Las vagas promesas del Plan de San Luis en el sentido de revisar los juicios agrarios fraudulentos y la decisión insurreccional de Francisco I. Madero, gozan sin duda de simpatías entre numerosos contingentes de la pobrería rural. Pero en un primer momento las ambiciones campesinas son bastante limitadas; no se espera de Madero ningún cambio drástico en el orden existente, si acaso la reparación de algunas injusticias menores y el mejoramiento de las condiciones de regateo con la clase dominante.

Canceladas las grandes utopías restauradoras del siglo XIX, el campesinado mexicano reaparece en el escenario político del XX con expectativas muy modestas. Pero unos cuantos meses de revolución hacen más por la conciencia rústica que los treinta años pacíficos del porfiriato. En el curso de los combates los insurrectos miden sus fuerzas, descubren la fragilidad de su enemigo, vislumbran las debilidades de sus aliados coyunturales y radicalizan su propio proyecto político: no basta con atenuar algunos excesos, es necesario arrancar la injusticia de raíz. Y si las utopías conservadoras ya no resultan convincentes hay que inventar una utopía revolucionaria.

Quizá al principio, las comunidades de Morelos se fueron a la revolución “porque no querían cambiar”, como escribió Womack en su célebre libro, pero puestas a hacer se decidieron a cambiarlo todo. El proyecto zapatista plasmado en el Plan de Ayala, como también la Ley Ejecutiva para la Repartición de Tierra, promulgada en 1913 por Carrera Torres en San Luis Potosí, y otros programas campesinos semejantes, son la expresión más clara de que el movimiento agrario mexicano ya no mira hacia atrás sino adelante y está entrando en una nueva etapa histórica.

En la segunda década del siglo XX, los campesinos –que a lo largo del siglo XIX resistieron infructuosamente la instauración del sistema burgués y durante el interludio porfirista asumieron su derrota– emprenden la crítica práctica de ese orden inhóspito. Y esa crítica ya no es restauradora sino revolucionaria.

La maduración del movimiento campesino está lejos de ser homogénea. El proceso revolucionario es muy desigual y si en Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y otras regiones del centro, el zapatismo difunde un proyecto político claro, en otros lugares el conflicto es nebuloso y con frecuencia los campesinos combaten en trincheras ajenas y con banderas prestadas. Pero si la utopía revolucionaria no se transforma de un día para otro en patrimonio común, para 1920, tras casi diez años de violentos combates y enconadas confrontaciones políticas,

la opción radical forjada en Morelos y aclimatada en muchas otras regiones, se ha incorporado al imaginario colectivo del campesinado deviniendo una alternativa política nacional.

Pese a su carácter abigarrado y dispar, la insurgencia rural de 1910 no es otro movimiento agrario de corte decimonónico. Ya no se trata de una rebelión conservadora sino de la primera batalla campesina revolucionaria. Durante el gobierno de Porfirio Díaz los trabajadores rurales habían saboreado las amargas mieles del capitalismo económico; después, al calor de la lucha revolucionaria, le toman la medida al reformismo burgués y sus adalides. Estas dos experiencias los llevan a diseñar su propia opción revolucionaria. Y con la emergencia de este proyecto se cierra el ciclo insurreccional del siglo XIX y se inaugura el combate rural del siglo XX.

Pero, aunque la abrumadora mayoría de los combatientes sean campesinos y algunos naveguen con banderas propias, en las batallas de la segunda década del siglo XX también se dirimen las reivindicaciones del reformismo burgués. Puesto entre la espada y la pared por los intentos restauradores neoporfiristas y la intransigencia campesina, este sector tiene que radicalizarse en cada nueva fase de la lucha, si no quiere verse rebasado por la derecha o por la izquierda.

Así, finalmente, el núcleo más visionario de la pequeña burguesía logra imponerse en el plano nacional, mientras que las otras fuerzas se diluyen o se repliegan a sus reductos locales. Tras diez años de cruentos combates, el porfiriato y los grupos más conservadores han sido definitivamente derrotados. Pero también los campesinos radicalizados, el ala izquierdista de la revolución, han perdido la batalla.

La revolución después de la revolución

Las luchas campesinas mexicanas del siglo veinte se inician con una derrota. Pero se trata de una derrota gloriosa y sumamente fructífera. Gracias a su intransigencia en los años violentos de la revolución, los rústicos se abrieron un espacio

económico en el desarrollo capitalista posterior, adquirieron reconocimiento social, se trasformaron en emblema cultural posrevolucionario y conquistaron un excepcional espacio jurídico y político dentro del nuevo Estado mexicano.

El agrarismo institucional es resultado de la correlación de fuerzas desarrollada durante la revolución. Pero la consagración constitucional de la Reforma Agraria no es suficiente, y el destino del agrarismo en las décadas posteriores dependerá de un permanente regateo entre los campesinos y el nuevo Estado. De esta manera, la reforma rural mexicana se constituye en ámbito de perpetuos y enconados conflictos. Las fluctuaciones de la política agraria durante los años posrevolucionarios expresan la cambiante correlación de fuerzas que se establece entre sucesivos gobiernos obsesionados por la idea de clausurar la Reforma Agraria, dejándola a medias, y un movimiento campesino terco en llevarla hasta sus últimas consecuencias.

Con el fin de la etapa armada de la Revolución y la consagración constitucional de los derechos campesinos, culminó el prolongado combate por la conservación o restitución de la tierra, iniciado casi desde la conquista. Pero la transformación de una demanda en un derecho no clausuró las luchas rurales. En la posrevolución los trabajadores del campo tuvieron que hacer valer sus nuevas atribuciones constitucionales, y el agrarismo reapareció como lucha para que se ejecutara la Reforma Agraria.

Durante el gobierno de Carranza, en el breve interinato de De la Huerta y a lo largo de los periodos presidenciales de Obregón y Calles, se institucionalizó un agrarismo epidérmico dirigido a restablecer la paz social, desmovilizar a los insurrectos y conquistar legitimidad para el nuevo Estado. El ideólogo carrancista Luis Cabrera había definido al ejido como "el complemento del mísero jornal", y hasta 1935 este postulado presidió el reparto: se entregaron dotaciones ínfimas en tierras de temporal, apenas para una agricultura de subsistencia, mientras que los terrenos aptos, los cultivos de plantación y la

agroindustria, seguían reservados a la propiedad privada. Situación contradictoria, pues a la vez que el Estado pretendía obtener consenso y base social organizada en el medio rural, restringía los derechos agrarios constitucionales, excluyendo del reparto a los peones acasillados y haciendo inenajenables latifundios de plantación y agroindustrias.

Y en vez de la anhelada paz social se inauguró una nueva etapa de lucha agraria; un movimiento campesino ya no insurreccional, pero tan beligerante como el de la década anterior y, a veces, políticamente más radical.

De 1926 hasta 1933, la Liga Nacional Agraria (LNC) fue la organización campesina más poderosa, y los agraristas rojos, inspirados tanto por Zapata como por Lenin, realizaron promisorios experimentos sociales. En Yucatán, el Partido Socialista del Sureste y sus Ligas de Resistencia impulsaron una suerte de socialismo indígena, que reivindicaba la cultura maya frente al criollismo de la “casta divina”, la comunidad rural contra la hacienda, y la autosuficiencia alimentaria sobre la agroexportación henequenera de enclave. A esta experiencia, frustrada en 1924 por el asesinato de su líder, el zapatista Carrillo Puerto, siguieron las de Veracruz y Durango, encabezadas respectivamente por los comunistas Úrsulo Galván y José Guadalupe Rodríguez, la de Michoacán que lideraba el ex mojado Primo Tapia, y la que en la Costa de Guerrero impulsaron los hermanos Escudero, el vate Valente de la Cruz y los hermanos Vidales. También se desarrollaron fuertes movimientos encabezados por caudillos regionalistas como Saturnino Cedillo, en San Luis Potosí, y Tomás Garrido Canabal, en Tabasco, que siendo conservadores empuñaron banderas radicales.

La intención de Plutarco Elías Calles de dar por terminada la reforma rural, y el que la LNC no se sometiera al recién constituido Partido Nacional Revolucionario, colocaron a los agraristas rojos a la defensiva. Y la Liga sufrió varias divisiones, hasta que en 1933 la corriente encabezada por Graciano Sánchez y respaldada por Lázaro Cárdenas, entonces candidato a la Presidencia de la República, creó la Confederación Campesina

Mexicana, antecedente inmediato de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

El agrarismo hecho gobierno

Para Lázaro Cárdenas los campesinos podían pasar de la agricultura de subsistencia a la comercial transformando al ejido en eje desarrollo agropecuario, y por eso en su sexenio repartió más y mejores tierras que en los 20 años anteriores, creó el Banco de Crédito Ejidal y promovió las formas colectivas de producción. Cárdenas hizo suyas muchas de las banderas de los campesinos rojos de los años veinte y en cierto sentido durante su mandato el agrarismo radical se volvió gobierno.

Este viraje no fue gratuito, estuvo precedido por incontables tomas de tierras y multitudinarias huelgas de jornaleros agrícolas, que junto con el incendio cristero, ponían en entredicho la eficacia económica y la legitimidad social del modelo de desarrollo agropecuario impulsado desde los años veinte.

Casi todas las acciones agrarias cardenistas fueron antecedidas por enérgicas luchas campesinas. La expropiación de cerca de 500 mil hectáreas en La Laguna y su distribución entre casi 50 mil beneficiarios, fue la culminación de recurrentes paros de jornaleros agrícolas, que en agosto de 1936 se transformaron en una incontrollable huelga general. En Mexicali, Baja California, la expropiación de casi 100 mil hectáreas en beneficio de unos cuatro mil ejidatarios, resolvió una larga serie de invasiones al latifundio de la *Colorado River Land Co.*, iniciadas desde 1923. Con la restitución de 36 mil hectáreas a la comunidad Yaqui de Sonora, culminaron cuatro siglos de combate casi ininterrumpido. La expropiación de las tierras cañeras de la *United Sugar* de Los Mochis, Sinaloa, respondió a la lucha por mejores condiciones de trabajo. Y la movilización sindical de los jornaleros precedió también a la afectación de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia en Michoacán.

El radicalismo agrario de Cárdenas legitimó con creces sus pretensiones de unificación campesina, y durante su mandato

el Estado mexicano logró, por primera y única vez, coadyuvar al surgimiento de una organización rural oficialista que por un par de años fue auténticamente representativa; la CNC, formada por decreto presidencial de 1935 y constituida en 1938.

Si el zapatismo histórico es el campesinado vuelto ejército, el cardenismo fundador es el campesinado hecho gobierno. Por eso, en el cruce de los milenios tantos hombres del agro son neozapatistas y neocardenistas; campesinos que se identifican con los llamados justicieros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y respaldan las consignas libertarias del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los años negros

Desde 1940 el gobierno dio marcha atrás a la reforma agraria, pero el movimiento rural ya no recuperó la fuerza y beligerancia de la inmediata posrevolución, entrando en un prolongado reflujo interrumpido sólo por breves estallidos.

Si los gobiernos del medio siglo pudieron revertir el agrarismo sin incendiar el país, fue por que el reparto ejidal de Cárdenas había satisfecho las demandas más urgentes de los campesinos y al mismo tiempo los había encuadrado en una organización obediente. Claudicante apenas a dos años de su fundación, la CNC encajó sin chistar las ocho mil resoluciones de inafectabilidad agrícola y 203 de inafectabilidad ganadera, que entregara Ávila Camacho, y no protestó cuando Miguel Alemán aumentó los límites legales de la pequeña propiedad y otorgó de nueva cuenta el derecho de amparo a los propietarios de tierras, que les permitía bloquear jurídicamente las resoluciones expropiatorias.

Pero su complacencia tuvo un alto costo y pronto la CNC perdió la exclusividad. En 1947 Vicente Lombardo Toledano formó el Partido Popular; y dos años después la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), que a las primeras de cambio perdió sus bases obreras, pero en los años cincuenta se transformó en una organización campesina con

fuerte arraigo en el noroeste del país. Cuatro años más tarde, una escisión del PRI liderada por el general Miguel Henríquez Guzmán fundó la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y su brazo rural la Unión de Federaciones Campesinas, donde militaban algunos dirigentes cardenistas. La Unión no tuvo la continuidad de la UGOCM, pero ambas expresaban el descontento rural con la política agraria del gobierno y con el oficialismo de la CNC.

En los años cuarenta del siglo XX se consolidó también una vertiente inédita del movimiento campesino: la lucha de los ejidales comerciales por agua, crédito y mercado. El reparto cardenista había creado numerosos ejidos de alto potencial, organizados en cooperativas, pero en los cuarenta gobierno prefirió apoyar a las empresas agrícolas privadas. Apareció entonces una nueva trinchera agrarista; un frente de lucha que, además de la tierra, reivindicaba la autogestión y facilidades económicas para la producción ejidal, y que tuvo sus más intensas manifestaciones en los ejidos colectivos de La Laguna, pero se presentó también en los campos cañeros de Los Mochis, Atencingo y Zacatepec, impulsado por asociaciones de productores como la Unión Central de Sociedades de Crédito Colectivo Ejidal, de la Comarca Lagunera, y la Sociedad de Intereses Colectivo Agrícola y Ejidal Emancipación Proletaria, de Los Mochis.

En los cincuenta, la repatriación de más de un millón de braceros y las sucesivas crisis, que afectaron tanto la producción de alimentos para el mercado interno como la exportación, embrocaban severamente al agro. A fines de la década, la lucha por la tierra de una generación de campesinos nacida después de la revolución, se extendió por todo el país. En el noroeste hizo cabeza la UGOCM, que en 1958 y 1959 organizó tomas de tierra en Baja California, Sonora y Nayarit. Ascenso agrarista de corta duración que durante los años sesenta derivó en nuevo reflujo.

Pero mientras el movimiento de masas se aplacaba, en algunos estados estallaba la violencia libertaria. En 1961 el gene-

ral retirado Celestino Gasca convoca a una caricaturesca y abortada insurrección, que sin embargo llama la atención por el gran respaldo que logró en zonas rurales de Veracruz. Más de consideración son las autodefensas armadas campesinas que aparecen en Chihuahua a principios de los sesenta y las guerrillas de base rural que surgen en Guerrero a fines de la década, una encabezada por Genaro Vázquez y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y otra liderada por Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres.

En los años sesenta la producción agropecuaria reduce su crecimiento y en los primeros setenta se desplomaron las cosechas de maíz y de frijol. A mediados de la década se desata de nueva cruenta la lucha por tierra y mejores precios para la producción campesina.

Los últimos sesenta y los setenta son años de insurgencias, tanto estudiantiles como obreras, urbano-populares y campesinas. Y el nuevo agrarismo se expresa en decenas de organizaciones regionales como el Consejo Nacional Cardenista, de Colima; la Comisión de los Cien Pueblos y la Unión Campesina Independiente, de Veracruz; el Campamento "Tierra y Libertad", de San Luis Potosí y el Frente Campesino Independiente, de Sonora. También hay convergencias multisectoriales como la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca, la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo y el Frente Popular de Zacatecas.

La insurgencia rural consigue el reparto de anacrónicos latifundios ganaderos, como los de Tlaxcala y la Huasteca potosina, y en 1976, por primera vez desde el cardenismo, son expropiadas en Sonora extensas y valiosas tierras de riego. En 1979 la mayoría de las organizaciones campesinas regionales que venían luchando por la tierra se unifica en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). Pero también cobran fuerza agrupamientos formados a resultas de los nuevos repartos agrarios como la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y del Mayo, en Sonora.

La reforma de la Reforma: los tiempos del neoliberalismo

La “reconversión” agraria de los ochenta y noventa cambia radicalmente el panorama rural. Durante los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, el Estado proveedor deja paso a las “sabias” decisiones del mercado, y junto con la reforma al Artículo 27 Constitucional –que restituye a la tierra su condición de mercancía, conculcada por la revolución “populista” de 1910– se desmantela todo el sistema burocrático de fomento, subsidio y regulación, que gravitaba sobre el “sufrido” campo mexicano. La banca de desarrollo adopta criterios comerciales y descobia a la enorme mayoría de sus acreditados; los subsidios agrícolas a la operación de la infraestructura hidráulica, a los energéticos y a insumos básicos, como semillas y fertilizantes, dejan paso a las cuotas y precios “realistas”; paraestatales como Inmecafé, Tabamex, Proquivemex, Profortara, Cordemex y la mayor parte de los ingenios azucareros, que con su intervención normativa, agroindustrial y comercial, regulaban el mercado de importantes productos agrícolas, son desbaratados; los precios de garantía de los cultivos básicos desaparecen y con ellos gran parte del sistema de acopio, almacenamiento y redistribución al que daban sentido.

A cambio de la vieja, intrincada e ineficiente “economía ficción” se ofrece la “libertad de mercado”: una libre cotización de las cosechas que deberá corregir el crónico “sesgo antiagrícola” de nuestra economía, obligando a que la ciudad pague al campo lo debido. Pero el parco y transitorio mejoramiento de los precios agrícolas relativos no compensa, ni con mucho, el brutal encarecimiento “realista” de los costos y, por si esto fuera poco, la apertura a las importaciones, consustancial a la “globalización”, desploma de nueva cuenta las cotizaciones agrícolas internas.

Desmantelando Agromex

Diseñadas y operadas a fines de los setenta, las políticas articuladas en Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que abar-

caban desde la producción primaria hasta el acopio y comercialización de los bienes agropecuarios, y que priorizaban a los pequeños y medianos productores de carácter campesino en lo tocante a los recursos fiscales, se comenzaron a modificar a principios de los años ochenta.

Con la crisis de 1982, se reduce el flujo financiero al campo, que ese año disminuye un 11,6% y el año siguiente el 16,7 por ciento, acumulando caídas más severas en 1986, con motivo de la crisis fiscal. Así, entre 1981 y 1988 el crédito agropecuario total, disminuye en 23,7 por ciento y desde entonces el financiamiento agrícola no volvería a recuperar sus niveles anteriores. Sin embargo, durante los ochenta Banrural se concentra en los cultivos básicos y en acreditar a los campesinos, de modo que pese a la reducción del monto de los recursos, aumenta la extensión de tierras acreditada.

Por otra parte, a partir de 1981 y durante todos los ochenta, los precios de garantía, que en la década anterior habían sido el instrumento para incentivar la producción, se reducen en términos reales para los principales productos alimentarios. Así, entre 1983 y 1989 el precio del maíz disminuye en 20 por ciento, el del arroz en 16 por ciento y el del trigo en 15 por ciento. El resultado es una contracción en la superficie cultivada y en la producción, tanto de granos básicos como de oleaginosas y cultivos forrajeros. Paralelamente, se da un notable incremento de las importaciones agropecuarias, sobre todo en sorgo, soya, azúcar, carnes frescas, grasas, aceites vegetales y animales y leche en polvo. Así en 1989 las importaciones agropecuarias y de alimentos procesados llegan a cuatro mil millones de dólares, mientras que las exportaciones son de sólo 3,7 millones.

Pese a que en el sexenio de Miguel de la Madrid, el fuerte y dispendioso apoyo al sector agropecuario y a los campesinos, instrumentado por López Portillo a través del SAM, se redujo sustancialmente, con el impacto que hemos señalado, durante su gobierno se mantuvo el mismo modelo en las políticas públicas hacia el campo. En cambio durante la adminis-

tración de Carlos Salinas, se operó un profundo ajuste estructural, que arranca desde 1990.

La hipótesis de los operadores del cambio era que la excesiva regulación e intervención estatal había distorsionado los precios, propiciando una inadecuada asignación de los recursos e inhibiendo la inversión privada. Pero la cuestión de fondo era la convicción neoliberal de que una agricultura donde se empleaba el 23 por ciento de la Población Económicamente Activa pero solo se generaba el 8 por ciento del Producto Interno Bruto, era insostenible. De lo que se desprendía un proyecto básico: desplazar del campo a los campesinos redundantes, operar un sustantivo drenaje poblacional que debía desplazar a unos tres millones de productores, es decir, entre quince y veinte millones de personas.

En cuanto al destino de estos "sobrantes", era asunto que preocupaba menos a quienes no tenían otro afán que "eficientar" al sector, pero en todo caso, se suponía que los desplazados encontrarían acomodo en la industria y los servicios, cuyo crecimiento daría para eso y más, pues desde entonces se pretendía que durante los noventa la economía creciera a tasas de entre seis y siete por ciento.

Esta conversión se instrumentó a través del Programa de Modernización del Campo, diseñado por la SARH a principios de 1990. En cuanto al crédito agropecuario, el planteamiento era diferenciar y depurar a los destinatarios, de modo que Banrural sólo debía atender a los de "potencial productivo". Así, entre 1988 y 1991, el crédito del banco disminuyó un 60%.

El modelo se basaba en diferenciar tres clases de agricultores: los productores empresariales, que serían atendidos por la banca comercial; los productores con "potencial productivo" capaces de transitar a la condición empresarial, que serían atendidos por Banrural; y los campesinos con cartera vencida y sin reales condiciones para devenir empresarios, que serían atendidos en un nuevo esquema: el Programa Nacional de Solidaridad.

En cuanto a la comercialización, desde 1989 se suprimieron todos los precios de garantía menos los del maíz y el frijol,

y Conasupo circunscribió su acopio a estas dos cosechas. Paralelamente se suprimieron los permisos de exportación (en 1985 317 productos requerían estos permisos mientras que en 1990 ya eran sólo 57) y los precios internos se alinearon con los externos.

Paralelamente, el Estado se retiraba de la producción y comercialización de insumos agropecuarios. Así, desapareció Fertilizantes Mexicanos y la industria de los abonos químicos se privatizó entre 1992 y 1993. Por otra parte, desde 1991 se otorgó permiso a las empresas privadas para comercializar semilla certificada, con lo que Productora Nacional de Semillas quedó sin materia de trabajo. En la misma tónica se privatizaron los Distritos de Riego, al pasar la administración de los sistemas hidráulicos a los productores.

La cereza del pastel fue el cambio en el artículo 27 de la Constitución; mudanza aprobada en febrero de 1992, por la que no sólo se daba por terminado el reparto agrario, sino que se establecía la posibilidad de privatizar todas las tierras en posesión social, directamente las ejidales e indirectamente las comunales, con lo que se abría al mercado la mitad de toda la superficie agrícola del país y el 40 por ciento de toda las superficies ganaderas y silvícolas.

Estos cambios respondían al modelo neoliberal de concebir el desarrollo, pero además eran necesarios para hacer posible la gran jugada del sexenio: la firma de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con Estados Unidos y Canadá. Un convenio comercial que, en lo tocante a la agricultura, suponía sacrificar la producción nacional de granos básicos - rubro en el que no somos "competitivos" - y privilegiar la de frutos y hortalizas, que corresponden a nuestras "ventajas comparativas". Pero para que el futuro TLCAN fuera posible, era necesario también suprimir todos los subsidios a los insumos, créditos, energéticos, etcétera, que distorsionaban costos y precios, y sustituirlos por un único apoyo directo y en efectivo al productor. La "madre de todos los subsidios" se llamó al Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), que se pagaría anualmente y por hectárea, conforme a un padrón.

En el campo, el modelo neoliberal de los ochenta y noventa, impulsado desde el gobierno de Miguel de la Madrid, pero sobre todo durante el de Salinas y el de Zedillo, significó poner fin al agrarismo, cancelando el derecho de los campesinos a la tierra, pero también suprimir las políticas públicas de fomento a la producción ejidal, dejando a los pequeños agricultores del sector social al arbitrio del mercado.

El presidente Carlos Salinas quiso endulzar el caramelo envenenado ofreciendo a los campesinos una “mayoría de edad” que debía conducirlos al bienestar a través de la eficiencia productiva.

Algunos se lo creyeron, pero la enorme mayoría de las organizaciones que concertaron con el salinismo una privatización agraria que supuestamente debía beneficiar al sector social de la producción haciéndolo autónomo y autosuficiente, vieron quebrar sus proyectos, arrastrados por una crisis de rentabilidad rural que dio al traste con muchos empresarios agrícolas privados, cuantimás con las modestas empresas asociativas de los labradores.

Así, los campesinos emprendedores, que en los ochenta creaban uniones de crédito del sector social, en los noventa se declaraban insolventes y fundaban una combativa asociación de deudores: El Barzón.

El cambio de milenio transcurre en medio del estruendo y la confusión. La tierra ya no es un derecho campesino sino una mercancía más, y las organizaciones rurales económicas, que lograron resistir la privatización, al desorden de las políticas públicas y a la interminable crisis agrícola, están de capa caída. Y si bien se vienen gestando nuevas formas de resistencia, también hay preocupantes manifestaciones de descomposición social. Muchos jóvenes campesinos descubren que sólo hay rentabilidad en la amapola y la mariguana y que los secuestros son el único mecanismo redistributivo disponible.

Cientos de miles de trabajadores rurales emigran a las ciudades, mientras que otros tratan de huir a los Estados Unidos, y aproximadamente mil quinientos cada día –uno

por minuto—lo logran. Numerosas comunidades acosadas por la creciente criminalidad desconfían de la ley y se hacen justicia por propia mano. Aleccionada por el fracaso de sus padres y sus abuelos, la nueva generación rural de plano ya no cree en el campo.

En un contexto de bancarrota económica recurrente, crisis política crónica, ingobernabilidad hormiga e interminable depresión social, resulta francamente alentador que un grupo de mexicanos golpeados por la historia, oprimidos por la estructura y cimbrados por la coyuntura; un contingente desde siempre ofendido y humillado, como son los pueblos indios, haya tomado la iniciativa en 1994 desatando una insurrección armada y que pronto deviene insurgencia pacífica, y esté luchando denodadamente por su emancipación. Y que lo haga no sólo por demandas inmediatas y materiales sino también y sobre todo por sus derechos históricos.

El afán de los pueblos indios por la autonomía, al que le abrió paso la estentórea insurrección del EZLN, no mira al pasado sino al porvenir. Es una demanda particular, pero también el emblema democrático y justiciero de los mexicanos rascos. De los que reclaman democracia, alternancia en el poder y una reforma política definitiva; pero también un nuevo pacto donde democracia comicial y participativa rime con justicia social y equidad económica. Lamentablemente la reforma constitucional pactada entre el gobierno federal y las comunidades indígenas, durante la presidencia de Zedillo, fue desconocida por este mandatario, y años después fue desvirtuada por la mezquindad y el racismo de la mayoría de los legisladores, de modo que los indígenas siguen esperando el reconocimiento constitucional de sus derechos autonómicos.

“El campo no aguanta más”

En el arranque del tercer milenio el paulatino pero consistente desmantelamiento de la pequeña y mediana agricultura mexicana tocó fondo. Pero los desahuciados de la “apertura”

y la “desregulación” se resisten a salir silenciosamente del escenario como dicta el libreto.

El movimiento agrario que estalla a fines de 2002 y principios de 2003, con el lema “*El campo no aguanta más*”, resulta de una crisis de rentabilidad alevosamente calculada por los tecnócratas de la “reconversión”, pero también de la tenaz resistencia de un campesinado acorralado, sin opciones rurales creíbles ni verdaderas salidas urbanas. Si en los setenta la lucha por la tierra parecía un combate contra la proletarianización, hoy los hombres del campo saben que se enfrentan a la exclusión.

En todas partes el mundo rural es profundo, persistente. Pero en México más, pues los campesinos se reinventaron a sí mismos mediante una revolución. Nuestra agricultura doméstica no es residuo ni herencia; nuestra economía campesina es una conquista. El derecho a la tierra se reivindicó exitosamente hace ochenta años; por la dotación de ejidos tuvieron que pelear de nuevo los agraristas rojos de los veinte y los campesinos cardenistas de los treinta; contra el renovado latifundio se movilizaron los neozapatistas de los setenta. Y desde el principio se luchó porque la tierra fuera del que la trabaja, pero también para que trabajando la tierra se pudiera vivir dignamente.

Hoy los jóvenes rústicos no creen en el campo. Pertenecen a una generación desilusionada de la agricultura doméstica que le apuesta a la emigración y sueña con hacerla en el gabacho. Pero el éxodo es doloroso, incierto, y hasta los trasterrados exitosos necesitan una retaguardia rural en el terruño. Entonces, más que síntoma de una extinción anunciada, la diáspora deviene creativa estrategia de sobrevivencia: un campo que camina no por dejar de ser sino para seguir siendo.

El primero de enero de 1994, al entrar en operación el TLCAN, el EZLN se levantó en armas contra un tratado emblema de la injusticia que ofende a los mexicanos. Nueve años después, cuando los alzados chiapanecos se han identificado principalmente con la causa autonomista de los pueblos indios, el movimiento campesino retoma la bandera inicial: la lucha

contra una globalización salvaje cuyos primeros damnificados son los indios y los pequeños agricultores.

El nuevo milenio es crucial para los campesinos organizados: o debilitamiento rápido, irreversible y final; o acciones heroicas propias de trances extremos. Al dismantelamiento los agraristas, de capa caída desde los ochenta, se suma en los noventa la ruina, descapitalización, migración, envejecimiento, desilusión, descomposición social y erosión organizativa, que aquejan a unas agrupaciones productivas cuya presunta "mayoría de edad" resultó acta de defunción. Pero las siete plagas no acabaron del todo con los campesinos, quienes en la inminencia de la extinción han decidido vender cara su vida.

La inesperada energía que despliega un sector largamente sangrado, proviene de que las diferencias de gremio, proyecto, táctica o filiación política, que por décadas separaron a los toma tierras de los productivos, a los viables de los desahuciados, a los autoconsuntivos de los mercantiles, a los de mercado interno de los exportadores, a los indios de los mestizos, a los autónomos de los políticamente afiliados, pasaron a segundo plano frente a un modelo agrosida que a todos vapulea. Y es que la exclusión es emparejadora, diluye las diferencias, unifica a los diversos.

La sorpresiva amplitud de las recientes jornadas, se explica también porque la veinteañera promesa neoliberal de que el mercado nos haría libres, justos y democráticos, resultó fallaz. Hoy están arruinados los "carentes de potencial", condenados de arranque, pero también los presuntamente "viables". Más aún, a la hora de la verdad resultó que los más pobres, que practican el autoabasto, resistieron mejor el vendaval que los puramente comerciales. Por si fuera poco, la abrupta apertura comercial devastó también a la micro, pequeña y mediana industria; y si bien los sectores trasnacionalizados se beneficiaron del vuelco, el conjunto de la economía no creció. Así, la presunta entrada al "primer mundo" vía globalización nortea, ya no tiene credibilidad; ni en el campo ni en ninguna parte.

El desconcierto político con que arrancó el milenio, también favorece al movimiento. El viejo régimen priista ejercía un eficiente control corporativo sobre los campesinos, que se diluyó con la administración de Fox; un gobierno derechista que retoma la política neoliberal del PRI pero carece de los operadores, amarres y fidelidades agrarias del viejo régimen. Así la CNC y los priistas del CAP aún no habían logrado un acomodo satisfactorio con las debutantes autoridades agrarias lo que propició su alianza circunstancial con el movimiento campesino. Sin duda lo que buscan los priistas es restaurar el viejo clientelismo, pero para lograrlo se han tenido que embarcar en una reforma de los paradigmas, hábitos y políticas agrarias del Estado, que ellos mismos ayudaron a construir. ¿Hasta cuándo?

Si por su despliegue y composición la actual lucha campesina es la más extensa e incluyente de las últimas décadas, por su contenido es el cuestionamiento social más directo y explícito que se haya dado al modelo neoliberal que inspira las políticas públicas desde hace veinte años; mentís que –bien visto– se extiende al absolutismo mercantil que inspira la globalización salvaje. Y es que los pequeños y medianos agricultores son los mayores perdedores de la globalización. Ciertamente el TLCAN no tiene toda la culpa; pero en su articulado está el epitafio de los campesinos, de modo que al confrontarse con la letra y el espíritu del tratado, el movimiento retoma la declaración de guerra al tratado comercial con que se alzaron hace nueve años los indios chiapanecos.

Cuestionamiento que no se queda en asuntos de merca-deo, pues al ser abismal nuestra asimetría con el norte, los campesinos y la agricultura de por acá no son defendibles sin apelar a sus funciones sociales, ambientales y culturales, sin reivindicar la polifonía de un agro que cosecha café pero también aire, tierra y agua; que produce maíz pero igualmente seguridad y soberanía alimentarias; que genera materias primas al tiempo que empleos; que es un sector de la producción económica pero también un reproductor de

cultura, de identidad, de solidaridades. Y admitir esto es reconocer los límites infranqueables y terminales del absolutismo mercantil, un sistema desafanado de las diversidades humanas y ambientales, donde lo que no produce ganancia no tiene valor.

Algunos piensan que el espíritu de la época está en las luchas reactivas e informales que se confrontan desde fuera con el orden económico, social o político. Batallas espectaculares pero efímeras que brillan, concitan extensas solidaridades y se apagan al enfrascarse sus animadores en trajines menos vistosos. Las jornadas campesinas han sido un mentís a tal predicción. Como el movimiento indígena de los últimos años, la presente lucha es una “protesta con propuesta”, como dicen sus animadores. Así como el Congreso Nacional Indígena dispone de un elaborado planteamiento autonómico y busca su reconocimiento constitucional, así las organizaciones campesinas saben bien lo que quieren y su planteos programáticos son más consistentes, específicos y argumentados que las recetas de los neófitos burócratas agrarios que nos aquejan.

Y si hasta diciembre del 2002, cada sector y cada organización tenía sus propias demandas y propuestas particulares, hoy se han articulado en un consistente programa unitario. Un planteo comprehensivo y estratégico que permitió romper con los habituales bilateralismos divisionistas y emprender una negociación multilateral con el gobierno.

Las recientes jornadas campesinas son valiosas en sí mismas, pero también porque le desbrozan el camino a la futura movilización de contingentes obreros. Fuerzas que ya se desplegaron en las acciones solidarias con los campesinos pero tienen su propia agenda clasista y nacional: en primer lugar detener la reforma patronal y corporativa a la Ley Federal del Trabajo, pergeñada por la iniciativa privada, los charros y el gobierno, al tiempo que impulsan un proyecto de Ley democratizador y favorable a los asalariados; en segundo lugar, impedir la privatización silenciosa de la producción, distribución y comercialización de electricidad, que es el pri-

mer paso en la entrega del petróleo y otros energéticos al capital trasnacional.

En la misma línea de ideas, las rústicas revueltas del 2003 son importantes en el tránsito de resistir las reformas antipopulares y antinacionales del “gobierno del cambio”, a impulsar reformas justicieras. Hasta ahora la izquierda social y la izquierda política han logrado detener las iniciativas fiscales, energéticas, laborales y educativas de Vicente Fox. En cambio el movimiento campesino ha conseguido también formular e impulsar su propia reforma. Una mudanza que no se impondrá de un día para otro, pero que avanzará paulatinamente en tanto lo permita la correlación de fuerzas. Reforma en curso y sostenida desde abajo, que desacredita las visiones en el fondo apocalípticas de quienes creen que resistiendo y confrontando desde fuera llegaremos por arte de magia –o por cualquier otra vía– a un vuelco definitivo del sistema.

La lucha campesina ayudó a colocar en la agenda política uno de los temas identificados por la Consulta sobre Prioridades Nacionales, que a fines del 2002 impulsaron diversas fuerzas políticas y sociales, y cuya importancia se ratifica ahora, ya no con el peso del voto sino con la contundencia de la movilización. Y esta agenda, sustentada en las opiniones y acciones de una sociedad organizada y participativa, le da sentido democrático y compromiso real a la participación de la izquierda en los inminentes comicios; en particular en los que definirán la composición de la cámara de diputados, pieza clave en las futuras batallas por la reforma del estado. El nuevo pacto para el campo mexicano se tendrá que empujar desde abajo, pero también desde arriba, y es importante que los campesinos amarren compromisos con diputados y senadores progresistas. Pero al mismo tiempo esto obliga a que los partidos de izquierda redefinan su función y en vez de ver, como fines en sí mismos, el triunfo en los comicios y la conquista de puestos públicos, los asuman como compromisos programáticos socialmente vigilados.

Colofón: “Tierra y libertad” ataca de nuevo

El siglo XX amaneció desmañado por los perentorios gritos de *¡Semlia y volia!* ¡Tierra y libertad! –que hermanaban a los narodnikis rusos con los zapatistas mexicanos–, se desayunó leyendo la crónica de dos grandes revoluciones campesinas, con sus auspiciosas reformas agrarias, y le llegó la noche en medio de un renovado entrampe del mundo rural.

Transcurrida la centuria fabril y urbana por excelencia, el malestar agrario no ha remitido y los crepusculares campesinos reclaman de nueva cuenta tierra y libertad, *semليا y volia*. Al alba del XXI la reforma rural es una asignatura pendiente.

Pero no se trata de la misma reforma. Los avatares agrarios del siglo pasado crearon situaciones originales que plantean desafíos inéditos. Las transformaciones rurales del milenio entrante demandan paradigmas nuevos y tendrán que hacer su propio camino.

La reforma agraria de antes debía abolir las formas de propiedad, relaciones sociales y modos de dominación del viejo régimen; propiciando con ello el desarrollo tanto de la agricultura como de la economía en su conjunto, así como la instauración de un orden de libertades civiles.

Si, además, era impulsada desde abajo por los campesinos y otras clases populares, la reforma adoptaba un talante justiciero, suponía repartos territoriales más o menos extensos y con frecuencia apostaba a una acumulación de capital agrario basada en el trabajo propio, sea por una vía familiar tipo *farmer*, o a través de cooperativas.

Pero, muchas veces, la estructura agraria señorial no provenía del viejo régimen sino del moderno colonialismo capitalista, siempre pragmático y proclive al saqueo, al rentismo y a los modos serviles de expoliación. Entonces, la reforma agraria se insertaba en la lucha por la independencia, y la expropiación de latifundios extranjeros era parte del programa de “liberación nacional”.

Con el socialismo real, que se estableció mayormente en países atrasados, agrarios, a veces coloniales y siempre en deuda con el viejo régimen, el siglo XX intentó soslayar los proverbiales padecimientos del “despegue” capitalista, transitando a la modernidad y a la justicia por una vía alterna. En estos países, las reformas democrático-burguesas se enterveraron con las transformaciones socialistas.

La conversión agraria antifeudal –y con frecuencia anticolonial– se empalmó con la progresiva implantación del socialismo agrario, encarnado en empresas estatales de producción o servicios y en medianas o grandes cooperativas campesinas.

En el segundo tercio del siglo, y sobre todo después de la segunda guerra mundial, aun en los países capitalistas se generalizó el involucramiento del Estado en la economía; dando por resultado reformas rurales fuertemente intervenidas por la burocracia y atosigadas por aparatosas empresas gubernamentales, lo que por un tiempo hizo poco discernibles los modelos agrarios socialistas de la semiestatizada agricultura de ciertos países de “economía mixta”.

En menos de cien años, el programa de la reforma se fue haciendo cada vez más complejo y variopinto: a la misión original de abolir el viejo régimen de propiedad y sus relaciones sociales y políticas se sumó pronto la descolonización del campo, cuando la reforma se daba en el contexto de una lucha de “liberación nacional”, y por último se le añadieron diversos modelos de reordenamiento rural, destinados, unos, a propiciar el desarrollo del capitalismo y otros a favorecer la acumulación originaria socialista. Así, la reforma agraria pasó de ser un ajuste de cuentas con los remanentes del régimen feudal a ser también premisa y palanca de las experiencias poscapitalistas del siglo XX.

Pero en el último cuarto de la centuria se desmoronaron el “socialismo real” y el “Estado de bienestar”, Marx y Keynes salieron de las bibliografías y cobró fuerza una nueva y perversa reforma agraria; una conversión neoliberal que favorece

la agroexportación sobre la soberanía alimentaria, que desmantela paraestatales, suprime regulaciones y propicia el libre mercado de tierras. Paradójicamente, la apuesta librecambista, que cancela subsidios y pretensiones de autosuficiencia en nombre de la globalización, no se da tanto en las economías mas fuertes –la Unión Europea, Estados Unidos y Japón protegen sus agriculturas– como en los países menos desarrollados. Y con excepcional entusiasmo en los regímenes postsocialistas que regresan al redil; la impulsan también, a su manera y en cierta medida, los sistemas socialistas de mercado.

Por si fuera poco, en la última década, el paradigma neoliberal topó con pared y sus recetas están siendo fuertemente cuestionadas. La total “libertad de mercado”, asumida fervorosamente por los más débiles, tiene efectos perniciosos en un mundo de bloques y monopolios. Pero más aún en el sector agropecuario, del que dependen en primera instancia la alimentación y la vida humana, y en un ámbito ecológico donde la diversidad natural es incompatible con la homogeneización productiva a ultranza y donde resulta difícil y artificioso convertir en valor de cambio el valor de uso del medio ambiente.

Así, aun las agriculturas mas ferozmente “reconvertidas” están demandando de nueva cuenta una cierta intervención estatal, y la oleada libertaria, anticooperativista y desreguladora de los países exsocialistas y neosocialistas está dejando paso a una revalorización de las responsabilidades agrarias del gobierno y dando un nuevo impulso a las formas asociativas, ahora voluntarias y autogestionadas.

Una nueva revolución agraria global comienza a cocinarse. Una conversión que asume los retos técnicos y económicos de preservar y restituir la biodiversidad irreductible al valor de cambio; una reforma social y política consecuente con las exigencias democráticas y autogestionarias de los tiempos que corren; una estrategia clara en sus objetivos pero flexible en sus métodos y capaz de dar soluciones distintas a problemas diversos, potenciando para ello los niveles locales y regionales

de decisión y gobierno; un modelo agrario inédito y de escala planetaria, sustentado en acuerdos multinacionales de cooperación que no necesariamente tienen que pasar por los gobiernos; un proyecto que al reconocer los derechos históricos de los pueblos autóctonos restituya a la tierra su sentido de hábitat y patrimonio moral; una reforma primermundista que también se dé el lujo de preservar la agricultura como paisaje y como cultura campesina.

Pero no por poner al día el programa agrario de la humanidad olvidemos que en muchos países la vieja reforma antilatifundista y emancipadora está pendiente, que en el arranque del milenio millones de trabajadores rurales sin tierra siguen demandando dignidad y reparto agrario: *¡Semlia y volia!*, ¡Tierra y libertad!